

Edición especial

DE MOC RA



Las otras ruinas
del terremoto

Guillermo Ramos Flamerich

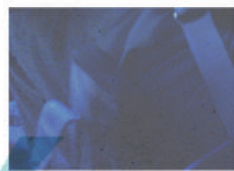
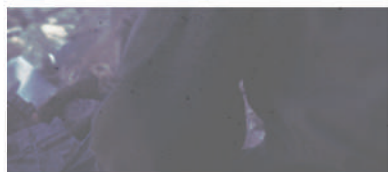
Cuando el Estado falla,
la comunidad
internacional
responde

Adriana Boersner-Herrera

Un tsunami
improvisado

Irene Carrasquero

TI ZA CIÓN



Democratización,
Edición especial
Editores: Paola Bautista de Alemán
y Juan Miguel Matheus
ISSN: 3135-0399
Julio 2026

DE MOC RA TI ZA, CIÓN

3

Las otras ruinas
del terremoto
Guillermo Ramos Flamerich

6

Cuando el Estado falla,
la comunidad internacional
responde
Adriana Boersner-Herrera

14

Un tsunami
improvisado
Irene Carrasquero

**Democratización,
Edición especial
Editores: Paola Bautista de Alemán
y Juan Miguel Matheus
ISSN: 3135-0399
Julio 2026**

Guillermo Ramos Flamerich

Las otras ruinas del terremoto

Ahora es el luto. Ahora es la rabia. Ahora es la impotencia por las vidas que se perdieron, por la improvisación y el abuso de poder. Ahora también será la esperanza, aunque se abra paso entre la incertidumbre, el miedo y el gran pantano autoritario en el que está sumergido Venezuela.

Los terremotos del 24 de junio de 2026 no solo sacudieron terriblemente la tierra venezolana. Hicieron visible, una vez más, la fractura de un país sometido durante años a la destrucción de sus instituciones. La naturaleza golpeó con fuerza y encontró un Estado debilitado y con pies de barro. Como si todo hubiera sido una ficción que la tierra terminó por tragarse. El hundimiento y la destrucción en la Misión Vivienda de Playa Grande son una dolorosa metáfora de una época en la que la tarea fundamental de prevenir y proteger quedó supeditada a los intereses de un grupo que no quiere perder sus privilegios.

Cuando una emergencia demuestra que la gente, con sus propias manos, puede hacer más que los organismos militares y burocráticos que no supieron, no pudieron o no quisieron responder, la tragedia se convierte en desamparo. Ya no es solo el desastre natural, es también la rabia ante un poder más preocupado

por controlar que por servir. Pero incluso en medio de ese fracaso sobresale otra verdad. La catástrofe nos habla al oído colectivo y nos recuerda de qué somos capaces cuando actuamos como una comunidad.

Quizás por eso una de las imágenes más potentes haya sido la del perro Tsunami como símbolo de una redención compartida. En medio del desastre, poco importaron ministros, generales o autoridades. Los héroes fueron vecinos, voluntarios, perros de rescate y socorristas internacionales que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Fue el heroísmo discreto y cotidiano de una sociedad que ha resistido a crisis múltiples y extendidas. A falta de respuestas oficiales, volvió a recorrer el boca a boca y las redes sociales una frase que resume nuestro aprendizaje doloroso: «solo el pueblo salva al pueblo».

La política debería construirse desde una profunda empatía, especialmente en momentos de tragedia. Sin embargo, mientras en las primeras horas la solidaridad espontánea era lo único que ofrecía un respiro ante el desconcierto colectivo, las autoridades aparecieron tardíamente. Antes que acompañar el duelo, buscaron justificarse y disputar el relato de la tragedia. Esa distancia entre el tiempo de la emergencia y el tiempo de la política dice mucho sobre el país que hoy somos y las instituciones que urge reconstruir.

Los terremotos demostraron nuestra actual soberanía condicionada. Venezuela volvió a ser vista como un territorio disponible para ser ordenado por otros, mientras se repetía casi mecánicamente la imagen del país feliz, bailando eufórico en las calles. Pero no estamos felices, ni mucho menos bailando sobre nuestros muertos. La actual administración de los Estados Unidos nos ve como una hacienda que pudiera administrarse desde fuera, protectorado para las grandes decisiones y una tiranía doméstica para

todo lo demás. El dominio colonial no solo consiste en la ocupación, sino en la sustitución de la voluntad propia por decisiones tomadas desde fuera y ejecutadas por capataces locales. Estas son otras ruinas, las de una soberanía que ya venía maltratada a pesar de los discursos patrioteros. Pero las cuentas del pueblo venezolano son otras. No son las del reparto del poder, sino las viviendas que se cayeron, el familiar perdido, el hospital que no funciona, la electricidad y el agua que faltan, los salarios en mengua y esa frase que tanto dice y que hace unos días vi publicada por la ilustradora Cristina Estanislao: «Como hormiguitas, cada quien con lo que puede, cerca y lejos, construiremos un país».

Por eso, después de tantas crisis en paralelo y por tanto tiempo, la democracia deja de ser una palabra abstracta. Democracia significa bienestar, acción oportuna, institucionalidad previosa, funcionarios que responden, justicia que investiga, ciudades creadas por y para la vida y no para la demagogia y por la emergencia oportunista.

Quizás vengan todavía nuevos momentos de autoritarismo controlado, de negociaciones opacas y de cambios administrados desde arriba. Pero el camino que merecemos es otro, reconstruir la democracia. Tal vez ese proceso de reconstrucción comenzó antes de que terminaran las réplicas. Empezó cuando desconocidos cavaron juntos entre los escombros, cuando aparecieron redes espontáneas de solidaridad. Allí se ejerció la ciudadanía. La tarea ahora es acelerar ese proceso. El luto es la memoria y la rabia es exigencia de renacimiento democrático. Venezuela no necesita solamente levantar escombros. Necesita reconstruir la confianza, las instituciones y su independencia en libertad. Necesitamos volver a levantar una república.

Adriana Boersner-Herrera

Cuando el Estado falla, la comunidad internacional responde

El 24 de junio, dos terremotos consecutivos sacudieron a Venezuela y dejaron destrucción, muerte y miles de familias en angustia y desamparo. Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente revelador fue lo que la tragedia expuso ante el país y ante el mundo: una verdad que durante demasiado tiempo muchos prefirieron esquivar. El terremoto no creó la crisis venezolana, pero sí le arrancó cualquier disfraz. Entre edificios colapsados, hospitales desbordados y comunidades enteras esperando auxilio, quedó al descubierto la imagen de un país sin capacidad estatal real para proteger a su propia población en un momento de emergencia.

Y si todavía quedan dudas sobre el origen político de esta tragedia, basta con mirar hacia atrás. Algunas viviendas que colapsaron o quedaron gravemente dañadas no fueron víctimas solo del sismo, sino de una negligencia anterior y sostenida: construcciones levantadas de prisa, con materiales de segunda, muchas de ellas bajo el sello de misiones y programas de vivienda diseñados más para proyectar la imagen de un régimen benefactor que para garantizar seguridad estructural real. Se privilegió la cantidad de entregas y el acto propagandístico de la llave simbólica por encima del control de suelos y la fiscalización técnica, en zonas que ya se sabían no aptas para tal fin. A eso se suma otro dato revelador:

buena parte de la red de sensores y estaciones sismológicas del país quedó inoperativa u obsoleta con los años, en algunos casos por abandono y en otros por el desmantelamiento o el hurto de sensores que nunca fueron repuestos. Un país que no invierte en saber cuándo y dónde puede temblar la tierra, tampoco invierte en estar preparado para cuando eso ocurra.

Las horas del pico y pala

En las grandes catástrofes, las primeras horas lo son todo. Son las horas en las que un equipo de rescate puede sacar a una persona con vida de debajo de una infraestructura colapsada, en las que una ambulancia a tiempo marca la diferencia entre la recuperación y la muerte, en las que la coordinación institucional, la existencia de hospitales equipados y la solidez de la infraestructura pública dejan de ser temas administrativos y pasan a ser asuntos de vida o muerte. Mientras familiares, vecinos y voluntarios improvisaban con sus propias manos, a punta de pico y pala, o hacían colectas para alquilar maquinaria de búsqueda y remoción de escombros, testimonios en varias zonas mostraron una escena reveladora: ausencia de profesionales y maquinaria, lentitud institucional, desorganización y una presencia militar que no logró responder a la escala de la tragedia. Más bien destapó la naturaleza de unas fuerzas de seguridad entrenadas por años para controlar, intimidar, reprimir, y matar, pero no para rescatar, proteger y coordinar una respuesta humanitaria de gran escala.

La presencia de la comunidad internacional

Fue precisamente en ese vacío donde la comunidad internacional adquirió una importancia central. La ayuda extranjera no apareció como un complemento menor ni como una formalidad diplomática, sino como una necesidad urgente. Equipos internacionales de búsqueda, rescate y atención médica, junto con apoyo

técnico y coordinación de emergencia, comenzaron a hacer en distintos puntos del país lo que las estructuras venezolanas no podían hacer con la rapidez y eficacia requeridas.

Pero reducir esa comunidad internacional a maquinaria pesada, brigadas médicas y rescatistas sería contar solo una parte de la historia. También resultaron decisivos otros actores: periodistas, corresponsales, fotógrafos, organizaciones de derechos humanos, expertos técnicos, plataformas de verificación y miembros de la diáspora venezolana que documentaron, contrastaron y difundieron lo que ocurría dentro del país. Corresponsales de distintos medios denunciaron presiones directas de funcionarios de seguridad para suspender transmisiones en vivo desde zonas afectadas, bajo amenaza de arresto, mientras periodistas locales agremiados reportaron restricciones similares de acceso. Esas restricciones se extendieron incluso fuera de las fronteras: se documentó cómo rescatistas quedaron varados en aeropuertos mientras esperaban luz verde para poder ingresar a Venezuela.

Ese episodio obliga a ampliar quién compone realmente la comunidad internacional que ha sostenido al país en esta emergencia. Ha sido también el trabajo de corresponsales que insistieron en transmitir pese a las presiones, de organizaciones gremiales de prensa que documentaron los obstáculos, y de plataformas especializadas en periodismo latinoamericano que recopilaron testimonios de reporteros con acceso restringido a comunidades devastadas y hospitales. En un país donde el poder disputa el relato tanto como disputa el territorio, informar con rigor bajo presión ha sido, en sí mismo, una forma de resistencia cívica y de auxilio a la verdad.

La raíz del colapso: no son las sanciones ni el “cerco” de la comunidad internacional

Cuando un país depende de rescatistas internacionales para sacar sobrevivientes de los escombros, recuperar cuerpos, atender heridos y organizar la emergencia, el problema ya no es solo la magnitud del desastre natural. El problema es el nivel de destrucción previa del aparato estatal. No estamos ante un terremoto severo sin más: estamos ante un terremoto que golpeó la fibra de una sociedad ya devastada por años de desinstitucionalización, corrupción, mala gestión y captura del Estado por una élite que hizo del poder un instrumento para su propia reproducción, no para el bienestar colectivo.

Eso es algo que quien ha vivido terremotos fuertes en otras partes del mundo tiende a no comprender del todo. Muchos se solidarizaron genuinamente con lo que ocurría en Venezuela, y no fueron pocos los que, para expresar empatía, repitieron una misma frase: “yo también he vivido terremotos fuertes, entiendo por lo que están pasando”. Pero esa comparación, aunque bienintencionada, pasa por alto la diferencia esencial. La distinción no está en la magnitud del sismo, sino en el contexto en el que ocurre. Vivir un terremoto en un país con Estado significa contar con protocolos de emergencia, cuerpos de rescate entrenados, hospitales operativos y una cadena de mando que responde. Vivirlo en Venezuela significó enfrentar, además del sismo, la ausencia casi total de esas garantías. Ese es el verdadero terremoto detrás del terremoto: el que convirtió una tragedia natural en una catástrofe humana.

Y aquí hay que decirlo con claridad: esa debilidad no se explica por una lectura simplista centrada en las sanciones o el llamado “cerco internacional”, tal como el régimen lo ha repetido durante años. El Estado no falló porque se vio súbitamente imposibilitado

desde afuera y sin recursos. Falló porque durante años, incluso en momentos de gran auge petrolero, ignoró advertencias, desvió, saqueó y malgastó recursos que debieron invertirse en infraestructura resistente, hospitales funcionales, servicios públicos confiables y sistemas reales de prevención ante emergencias. El problema de fondo no ha sido la ausencia de recursos, sino su uso político, clientelar y patrimonial en beneficio de quienes controlan el poder.

El argumento de fondo

La dependencia mutua del régimen venezolano y la comunidad internacional no es una anécdota diplomática: es la prueba de que el problema venezolano no es la fuerza sísmica, sino la fragilidad crónica de un aparato estatal que priorizó su propia supervivencia. La comunidad internacional, mientras tanto, se ve obligada a operar dentro de los límites que ese régimen le impone: salvoconductos, restricciones de prensa, y cooperación y negociación con funcionarios sancionados internacionalmente.

Otras tragedias de magnitud similar ofrecen una lección útil por contraste. En Haití, tras el terremoto de 2010 (magnitud 7.0), la comunidad internacional terminó sustituyendo casi por completo a un Estado colapsado, con resultados mixtos que hoy sirven de advertencia. En Turquía y Siria, en 2023 (magnitud 7.8), la ayuda externa reveló brechas similares entre un país con instituciones capaces de coordinar la respuesta y otro devastado por años de guerra y control autoritario. La lección común es clara: cuando la comunidad internacional debe reemplazar, y no solo complementar al Estado, la reconstrucción se vuelve más lenta, más frágil y dependiente de la voluntad política de quien gobierna el territorio. Venezuela no escapa a esa lógica.

Por eso la comunidad internacional no debe retirarse ni inhibirse, sino actuar con inteligencia. Su papel no debería restringirse a enviar equipos, fondos y hospitales de campaña, aunque eso siga siendo indispensable. La experiencia de otras crisis prolongadas enseña que también puede jugar un papel clave vigilando cómo se administra la ayuda, para evitar que la reconstrucción reproduzca el mismo patrón de corrupción y clientelismo que agravó la tragedia original. Eso implica fortalecer a la sociedad civil independiente y a las organizaciones locales que ya trabajan sobre el terreno, en lugar de canalizar toda la cooperación exclusivamente a través de estructuras controladas por un régimen que ha demostrado usar hasta la asistencia humanitaria como instrumento de control político.

Igualmente, la cooperación internacional no puede ser incondicional. Entregar ayuda sin exigir estándares mínimos de transparencia, acceso humanitario irrestricto y rendición de cuentas equivale, en la práctica, a legitimar al mismo poder que provocó la vulnerabilidad que hoy se intenta remediar. Condicionar no significa castigar a la población ni retener asistencia vital; significa exigir corredores humanitarios sin obstrucción, permisos ágiles para rescatistas y prensa, y mecanismos de fiscalización independientes sobre cómo se distribuyen los recursos.

La comunidad internacional también puede jugar un papel que trasciende lo inmediato: documentar. Organismos de derechos humanos y misiones de la ONU llevan años reuniendo evidencia sobre el deterioro institucional venezolano, y esta tragedia añade un capítulo más a ese expediente. Registrar con rigor los patrones de negligencia, obstrucción y uso político de la ayuda no es un ejercicio académico; es sentar las bases para que, el día en que Venezuela pueda exigir cuentas, exista una memoria documentada de lo ocurrido. Ese trabajo de fondo, silencioso y sostenido, puede terminar siendo tan relevante como cualquier hospital de

campaña, sobre todo porque las secuelas, desplazamientos, interrupciones educativas, pérdida de empleos y nuevas formas de precariedad para millones de personas, serán igual de relevantes para ese expediente.

Finalmente, esta crisis exige un horizonte más largo que el de la emergencia. La fragilidad expuesta por el terremoto no es un accidente reciente. Décadas de desinstitucionalización no se van a resolver con una sola oleada de asistencia. Por eso la comunidad internacional debe pensar más allá del rescate inmediato y ayudar a diseñar estrategias de reconstrucción institucional a mediano y largo plazo: capacitación técnica, transferencia de conocimiento en gestión de riesgos, sistemas de alerta temprana y fortalecimiento de capacidades locales de respuesta. Sin ese compromiso sostenido, que debe ir más allá de un fondo de recuperación en dólares, Venezuela quedará expuesta a que la próxima emergencia, sísmica o de cualquier otra naturaleza, encuentre exactamente el mismo vacío que esta.

En esta exigencia, y pensando en un horizonte de mediano plazo, no puede obviarse el proceso político que Estados Unidos ya había iniciado tras la captura de Maduro y Flores a principios de este año. La administración Trump delineó entonces tres fases sucesivas: estabilización, recuperación y transición democrática. El terremoto ocurrió justo en ese tránsito entre fases, un momento particularmente vulnerable en el que la hoja de ruta aún no terminaba de consolidarse. Esa coincidencia obliga a Estados Unidos a algo más que asistencia operativa y humanitaria puntual: exige sostener la responsabilidad y el compromiso adquirido para evitar que la tragedia venezolana quede relegada frente a las prioridades internas de Washington, en un año marcado por las elecciones en noviembre de mitad de mandato y la mirada ya puesta en la contienda presidencial de 2028.

La comunidad internacional ha demostrado que puede tender la mano cuando el suelo se abre. Ahora debe demostrar que también puede sostener esa presencia con una lectura política honesta, sin repetir los errores de otras reconstrucciones fallidas. Porque lo urgente ya no es solamente pensar si Venezuela necesita ayuda internacional, esa necesidad es evidente e innegable. Lo que realmente importa ahora es si el mundo estará dispuesto a sostener esa ayuda en el tiempo, y a nombrar con claridad tanto los problemas estructurales como a los responsables de que Venezuela llegara tan desprotegida a esta tragedia.

Irene Carrasquero

Un tsunami improvisado

Como cualquier catástrofe natural que se precie de serlo, el doble terremoto del 24 de junio sacudió a Venezuela de forma inesperada y violenta. No hubo chance para titubeos ni mucha conciencia para reaccionar.

El polvo de los edificios caídos no encontraba aún su camino mientras los venezolanos, paralizados y aterrados, tratábamos de asimilar. Y en cuestión de minutos, en una colectividad equipada con teléfonos celulares de escasa señal, empezó a rodar el cuento callejero de la posibilidad lógica de un tsunami.

Pero este segundo cataclismo, muy posible en la mente de una población prácticamente acostumbrada al desastre y sin cultura sísmica alguna, nunca llegó. Por fortuna y por razones que solo la naturaleza es capaz de decretar.

El rumor fue rápidamente arrojado por la realidad horrible de una gigantesca destrucción centrada en La Guaira. La certeza atropelló a la incertidumbre y, a partir de allí, Venezuela comenzó a transitar su nueva historia. Una todavía más exigente, cuando pensábamos que eso no era posible.

Pero aunque el mar Caribe no nos castigó, un oleaje de mil facetas espera vigilante a la orilla de nuestra extensa costa.

Un tsunami de muchas caras. Todas duras. Todas dramáticamente desafiantes.

Familias fracturadas: un tsunami social

Sin duda, el fenómeno más devastador al que podemos exponernos como nación.

Familias desplazadas e incompletas, sin hogar ni expectativas. Sin rumbo. Sin respuestas. Sin explicaciones. Niños en la orfandad o separados de sus familiares, carentes de un panorama que dé idea alguna de su futuro. Madres en el abandono de la soledad. Padres en la exigente misión de rescatar lo que acaso queda de una vida que en segundos dejó de ser.

Es pronto para saber la magnitud verdadera de esta tragedia social. Pero ya el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) ubica en 1,8 millones las personas que requieren asistencia humanitaria a raíz de los terremotos. De allí, 680 mil son niños, a cuyas precarias condiciones sanitarias y de vivienda se suma la presumible desaparición de sus escuelas. Porque aún sin cifras oficiales definitivas, es esperable una afeción importante de la red educativa en los estados más golpeados, dejándola sin dirección. Nunca más literal.

Se trata de una desolación sin precedentes en nuestra historia más reciente. Una conmoción física y mental generalizada que ha dejado socialmente abatido a todo un país.

Estrés post traumático: un tsunami psicológico

Nadie en Venezuela salió ileso de las mortales sacudidas del 24 de junio. Incluso quienes no sufrimos pérdidas familiares o materiales vivimos a diario en nuestra mente la tragedia de tantos hogares destruidos y experimentamos las consecuencias anímicas de un país gravemente herido.

Los efectos psicológicos a futuro de esta inédita situación son todavía difíciles de prever. Pero es evidente que el trauma posterior a los sismos y sus incontables réplicas, a las infinitas pérdidas en todos los sentidos y a la gran incertidumbre prolongada que vive la población están teniendo consecuencias inmediatas que, a mediano y largo plazo, pueden llevarnos a una peligrosa crisis de salud mental.

Estrés, insomnio, miedo recurrente y ansiedad severa son algunas de las más obvias señales individuales de un drama para el que nadie suele estar preparado. Y sus paralizantes efectos dan al traste con cualquier posibilidad de iniciar un rumbo hacia la recuperación. Sea personal o nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que “no hay salud sin salud mental”. Y como parte indivisible de un bienestar deseado, la mente y su cuidado deben establecerse como una prioridad impostergable si, como país, queremos dar un paso al frente.

Ingresos sepultados: un tsunami económico

Con la antesala de una situación económica volátil e indefinida, un doble terremoto de las magnitudes vividas barrió en menos de un minuto las tenues posibilidades de miles de familias

ya golpeadas por múltiples carencias y los desmanes de la eterna incertidumbre política nacional.

El turismo interno que hasta ahora soportaba la supervivencia diaria de innumerables habitantes de La Guaira, enterrado hace 27 años en el lodo de los deslaves, se desploma ahora junto a los edificios destruidos, cerrándole una vez más la puerta del sustento a un número incalculable de guaireños.

Empresas arrasadas y emprendimientos sepultados. Desempleo y falta de ingresos para básicamente subsistir.

En otros estados estructuralmente menos afectados, los sismos vinieron igualmente a agravar el ya tambaleante sistema económico vigente, alejando eventuales y necesarias inversiones y retrasando aún más las deseadas soluciones a una crisis de larga data.

Y, como país, vamos contabilizando además las exigencias financieras que implica comenzar a recuperarnos, estimadas preliminarmente por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) en 37 mil millones de dólares.

Un desafío descomunal para un Estado poco acostumbrado a la planificación, más entregado al malgasto y a la corrupción y con una cultura de la emergencia bastante cuestionable.

Ambientes vulnerables: un tsunami sanitario

La destrucción simultánea e instantánea de cientos de edificios dejaron en la calle a miles de ciudadanos que apenas se van contabilizando, dando paso a albergues improvisados e insuficientes, muchos soportados por organismos internacionales y la

voluntad inquebrantable de una comunidad civil que se organizó para hacerle frente a un desastre que nos superó con creces.

Con la rápida proliferación de grupos extensos de damnificados, principalmente en La Guaira, llegó el hacinamiento y, con él, el mayor potenciador de una crisis sanitaria: la falta de agua corriente y potable.

Más de 20 mil personas alojadas en refugios con muy poco acceso a la salubridad se traduce en un riesgo exponencial de enfermedades típicas de estos entornos vulnerables: gastroenteritis, hepatitis, gripe, neumonía, bronquitis, COVID-19, dengue y chikungunya. Los clásicamente más afectados: niños y ancianos.

Y con un sistema hospitalario siempre tendiente al colapso y a la ineficiencia, poco exitoso en cubrir las necesidades de la creciente población de bajos recursos en Venezuela, esta amenaza se vuelve una calamidad que atenta de forma directa con cualquier posibilidad de salirle al paso a la emergencia.

No obstante la evidente ayuda de organizaciones mundiales y países mejor preparados para enfrentar el caos, la contingencia de salud parece apenas iniciar y las medidas para combatirla si acaso comienzan a estar claras.

Desechos incontrolados: un tsunami ambiental

Dada la improvisación clásica de un Estado acostumbrado a resolver las crisis de cualquier manera, los desechos provenientes del fatal colapso de tantas edificaciones habitadas (algunas incluso desbordadas) comienzan a ser una preocupación para los ambientalistas más entendidos, además de un obstáculo importante para intentar salir del caos.

Después de la incansable labor de rescatar a los sobrevivientes, seguida de la trágica empresa de recuperar los cuerpos de los fallecidos —liderada en muchos casos y sin más remedio por los propios vecinos de cada cuadra— viene la gran pregunta de qué hacer con los restos materiales.

No se trata, como podría pensarse, de una mezcla maciza de concreto armado, acero, cabillas y bloques de construcción. Cada edificio derrumbado es un complejísimo amasijo deforme que aglutina también vidrio, electrodomésticos, residuos químicos, baterías, plástico, metales pesados, componentes eléctricos, minerales, textiles y alimentos descompuestos, entre otros desechos insospechados. La vida de miles de familias compactada en más de dos millones de toneladas de residuos, según calculan los expertos, que no hay dónde ubicar.

La atención se centra en la peligrosa cercanía de estos escombros a la costa de La Guaira y la mal entendida conveniencia y comodidad de depositarlos directa y rápidamente en el mar.

Otra batalla por librar, cuyo desenlace puede marcar una diferencia determinante en el porvenir del ecosistema marino en las costas venezolanas, esa intrínseca valía que nos ha distinguido como país caribeño.

Democracia y acción

Los venezolanos estamos clásicamente inmersos en la contradicción.

Vivimos preparados para seguir adelante en el ambiente infinito de la incertidumbre. Lo incomprensible forma parte de nuestra rutina y dejamos de hacer preguntas para protegernos de nuestras propias respuestas.

Gracias a esa curiosa particularidad de confrontar con ánimo lo inexplicable, instantes después del terremoto comenzó a escucharse con fuerza el griterío resuelto de familiares, vecinos, amigos y desconocidos que con sus manos desnudas removían escombros en busca de vidas, aplacando con miedo pero con entusiasmo las llamadas de auxilio debajo de aquella devastación.

La gente del día a día, con la autenticidad propia de quien se moviliza a pie, eligió actuar de inmediato. Sin guía ni lineamientos. Sin mandatos de poder. Sin un Estado. Con la posterior tutela de valientes rescatistas venezolanos y del mundo entero.

Y es que el mayor valor de una democracia en su sentido más puro y simple es la posibilidad cierta de que los ciudadanos decidan pero también actúen. Y en medio de esta adversidad, más que nunca en nuestra historia reciente, esta premisa se ejerció a plenitud. Porque aun cuando los venezolanos evocamos la democracia como una vieja y ajena fórmula que desentona en nuestro mapa nacional, la vivimos a diario como quien ocupa un sueño prestado con la ilusión de hacerlo suyo.

Pero en adelante el reto es otro. No hay ciudadanía capaz de enfrentar sola las gigantescas olas por venir. Porque una cosa es darle una mano al que se hunde y otra nadar con él en hombros para siempre.

El futuro se vislumbra abrumador. Son muchos los tsunamis que nos amenazan después de un doble terremoto tan letal. Y es muy peligroso no apertrecharse para su llegada.

Venezuela necesita salir a flote. El país se ahoga en medio de una violenta marejada que a duras penas le da un respiro para bracear.

Y demasiado lejano se vislumbra el inservible salvavidas. Uno viejo y desinflado que no da para más...

Autores

■ Guillermo Ramos Flamerich

Guillermo Ramos Flamerich es periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y doctorando en Historia por la Universidad Sorbonne Nouvelle (París), donde también obtuvo su maestría en Estudios Latinoamericanos. Se desempeña como investigador, editor y columnista en medios como *Prodavinci* y *Cinco8*, enfocándose en la historia política contemporánea de Venezuela y la recuperación de la memoria civil.

■ Adriana Boersner Herrera

Adriana Boersner Herrera es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Missouri (donde fue becaria Fulbright) y Licenciada en Estudios Internacionales por la UCV con maestría en la USB. Actualmente se desempeña como profesora asistente en The Citadel (Carolina del Sur) y ha sido investigadora senior para Venezuela en el proyecto ACLED (*Armed Conflict Location & Event Data Project*), especializándose en el estudio de regímenes autoritarios, política exterior comparada y las relaciones entre Rusia y América Latina. Previo a su carrera en Estados Unidos, fue docente en la Unimet, la UCV y la USB, y es autora de diversas publicaciones académicas sobre la autocratización y el liderazgo político en Venezuela.

■ Irene Carrasquero

Periodista venezolana en Caracas. Licenciada en Comunicación Social, mención Prensa, por la Universidad Católica Andrés Bello. Trabajó por 12 años en la Gerencia de

Asuntos Públicos de Petróleos de Venezuela en el área de comunicaciones corporativas. Colaboradora de la Revista *Estampas*, del diario *El Universal*. Columnista de opinión en *El Pitazo* en el espacio “Con la mano levantada”, a partir de su cuenta @unplanve. Autora de *Historias a Coletepelo*, un compendio de anécdotas, aventuras, cuentos y relatos de la vida cotidiana. Actualmente comparte sus textos a través de @unpicori, cuenta personal de temas particulares y diversos.

Índice

Las otras ruinas
del terremoto

Guillermo Ramos Flamerich

3

Cuando el Estado falla,
la comunidad internacional
responde

Adriana Boersner-Herrera

6

Un tsunami improvisado

Irene Carrasquero

14

Autores

22